**PROYECTO DE LEY N°\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE 2025**

**“Por medio de la cual se declara el Rio Meta, su Cuenca, Afluentes, su Biótica y Abiótica dentro de la Región de la Orinoquia Colombiana, como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones”**

**El Congreso de Colombia**

**DECRETA:**

**Artículo 1. Objeto.** La presente ley tiene por objeto declarar el Rio Meta, su cuenca y afluentes, su biótica y abiótica dentro de la Orinoquia Colombiana, como sujetos de derechos con el fin de garantizar su conservación, protección, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y la efectiva participación de la comunidad asentada en el área de influencia del rio.

**Artículo 2. Declaración.** Declárese el Rio Meta, su cuenca y afluentes, su biótica y abiótica dentro de la Orinoquia Colombiana, como sujetos de derechos y especial proyección ambiental.

**Artículo 3. Comité de Orientación y Protección del Río Meta - COPROM.** Crease el Comité de Orientación y Protección del Río Meta, su Cuenca y sus Afluentes – COPROM, como Representante Legal, el cual estará integrado por las direcciones de las Corporaciones Autónomas Regionales: a) CORPORINOQUIA, CORMACARENA, CORPOGUAVIO Y CORPOCHIVOR; así mismo, b) Por un delegado de las comunidades indígenas ribereñas constituidas en resguardos o cabildos y designado por ellas mismas; c) Un delegado del sector productivo y empresarial que realicen sus actividades dentro de la jurisdicción de los POMCA del Rio Meta, su cuenca y afluentes; d) Un delegado de las comunidades y poblaciones raizales y étnicas asentadas en las riberas del rio Meta; d) Un delegado de los municipios por los cuales pasa el rio Meta; e) Un delegado de los departamentos por donde corren las aguas del Rio Meta, su cuenca y afluentes; y, f) Un delegado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

**Parágrafo 1**. El COPROM será la instancia principal de articulación, seguimiento y veeduría social y ambiental para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos al río, así como para la formulación, implementación y vigilancia del Plan de Acción. Este Comité tendrá el deber de proponer acciones correctivas, preventivas y restaurativas ante cualquier afectación ambiental, social o cultural que comprometa la integridad del río Meta.

**Parágrafo 2**. La dirección y coordinación, estarán a cargo del delegado designado por el COPROM. La secretaria técnica estará a cargo del delegado de las Corporaciones Autónomas Regionales de forma rotativa.

**Artículo 4. Presupuestos.** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; las autoridades ambientales y los entes territoriales con jurisdicción en el Rio Meta, su cuenca y sus afluentes, a través del COPROM, apropiarán anualmente en sus presupuestos los recursos que sean necesarios para cumplir con el objeto de la presente Ley.

Vencido el correspondiente año fiscal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las autoridades ambientales y los entes territoriales con jurisdicción en el Río Meta, su cuenca y sus afluentes, presentarán un informe al COPROM en el cual se detallará la ejecución de los recursos presupuestados.

**Parágrafo 1.** La Nación, los Entes Territoriales, las Empresas Comerciales e Industriales del Estado, Las Empresas de Economía Mixta o Privadas, los Establecimientos Públicos y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Públicas o Privadas que exploten en las riberas o lechos de los ríos los recursos hídricos, mineros, ambientales y de otra especie que afecte la cuenca, directa o indirectamente, destinarán el 3% del costo bruto de la explotación de los recursos naturales del Rio Meta, su cuenca y sus afluentes determinados en la jurisdicción de los Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (POMCA), para apoyar la financiación del objeto de la presente Ley. La Contraloría General de la Nación vigilará y ejercerá el respectivo control fiscal de estos recursos por ser de carácter público.

**Parágrafo 2.** Los entes territoriales, las autoridades ambientales con jurisdicción en el Río Meta, su cuenca y sus afluentes, así como las demás entidades a las que se refiere la presente Ley, podrán realizar acuerdos de cooperación con personas jurídicas de naturaleza pública o privada, con o sin ánimo de lucro, de carácter nacional o internacional, con el fin de desarrollar proyectos en beneficio de la cuenca.

**Parágrafo 3.** El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible podrá, a través del Fondo para la Vida y Biodiversidad o cualquier fondo nacional creado para fines similares, destinar recursos, realizar acciones y ejecutar proyectos con destinación específica a la conservación, descontaminación y desarrollo sostenible del Río Meta, su cuenca, sus afluentes y las comunidades indígenas, étnicas y raizales que habitan sus riberas.

**Artículo 4. Instrumentos de ordenación**: Reconózcase el Plan de Ordenación del Rio Meta, la cuenca y sus afluentes “POMCA” y, los instrumentos de planificación y participación vigentes como marcos fundamentales para la gestión y desarrollo integral de la cuenca del Rio Meta y sus afluentes, garantizando la coherencia y complementariedad para intervenciones que promuevan su conservación, protección, restauración y mantenimiento, así como, el reconocimiento y potencialidad de los servicios eco sistémicos y su articulación de esfuerzos para que coexistan los derechos del Rio Meta, su cuenca , afluentes y las comunidades indígenas, étnicas y raizales que habitan sus riberas.

**Artículo 5. Reglamentación:** Facultase al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible para que, dentro de los 6 meses siguientes a la vigencia de la presente Ley, expida los reglamentos del Comité de Orientación y Protección del Río Meta, su Cuenca y sus Afluentes – COPROM.

**Articulo 5.** Derogase en todas sus partes la Ley 1938 de 2018**,** la cual tendrá vigencia hasta 6 meses después de la publicación de la presente Ley; termino para que CORMACARENA entregue la memoria institucional correspondiente a los municipios del departamento del Meta que pertenecen a CORPORINOQUIA, de conformidad con la Ley 99 de 1993 y que, no corresponden a la jurisdicción de la Área de Manejo Especial de la Macarena (AMEN), establecida en el Decreto 1989 de 1989.

**Artículo 7. Vigencia**. La presente Ley rige a partir de su promulgación.

**JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS**

Representante a la Cámara

Departamento del Meta

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY Nro.\_\_\_\_\_\_\_\_ DE 2025**

**“Por medio del cual se declara el Rio Meta, su Cuenca y Afluentes en donde su Biótica y Abiótica pertenecen a la Región de la Orinoquia, como sujeto de derechos y se dictan otras disposiciones”**

El presente proyecto de Ley contiene dos aspectos fundamentales. En primer lugar, la declaración del río Meta, su Cuenca y Afluentes como sujeto de derechos, en consonancia con lo establecido por la Honorable Corte Constitucional, que ha exhortado al Congreso de la República a legislar sobre esta materia. En segundo lugar, la creación de un comité encargado de gestionar todo lo relacionado con la designación como sujeto de derechos al río meta.

De igual manera, se garantiza la participación activa de los grupos étnicos asentados en la ribera del río Meta y sus afluentes, los cuales representan aproximadamente el 83.29% de la población de la zona, equivalente a 14.132 habitantes de un total de 16.967 en el departamento del Meta, concentrados principalmente en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio. Su cosmovisión y costumbres ancestrales constituyen un aporte indispensable para la protección y cuidado de la biótica y abiótica del río.

Así mismo, somos nosotros los llamados a derogar las Leyes que con anterioridad se hubieren aprobado y sancionado en perjuicio de los territorios y sus comunidades, como lo es la Ley 1938 de 2018, en donde se quita la jurisdicción de CORPORINOQUIA sobre los municipios, VILLAVICENCIO, BARRANCA DE UPIA, CUMARAL, RESTREPO, CABUYARO, PUERTO LÓPEZ, PUERTO GAITAN, ACACIAS, GUAMAL, CASTILLA LA NUEVA, SAN MARTIN, CALVARIO, SAN CARLOS DE GUAROA y SAN JUANITO, en donde sus alcaldes, sector productivo, ong ambientales y comunidades indígenas nunca podrán integrar el Consejo Directivo por no hacer parte del AMEM, según el art. 38 de la ley 99 de 1993 en concordancia con el Decreto 1989 de 1989.

Configurándose un acto discriminatorio sobre el 83.29 % de los habitantes de los resguardos y cabildos de las comunidades indígenas que pertenecen a la cuenca del Rio Meta y sus afluentes, principalmente en los municipios de Puerto Gaitán, Puerto López y Villavicencio, correspondiente a 14.132 habitantes del total de los 16.967 que habitan en el departamento del Meta, y que no hacen parte de la AMEM, no tienen representación ni la tendrán jamás en el CONSEJO DIRECTIVO DE CORMACARENA, lo que implica grandes repercusiones en las decisiones de la pervivencia de estos pueblos.

**Objeto del proyecto**

La presente iniciativa legislativa tiene por objeto declarar el Rio Meta, su cuenca y afluentes, su biótica y abiótica dentro de la Orinoquia Colombiana, como sujetos de derechos con el fin de garantizar su conservación, protección, mantenimiento y restauración, se garantiza la participación de la comunidad asentada en el área de influencia del rio y se establece un comité interdisciplinario que planifique y tome las medidas necesarias para su conservación.

**Marco histórico del Río Meta**

El desarrollo y sostenimiento humano en un principio se originó entorno a los ríos. Su riqueza biótica ofrece a las comunidades asentadas en su ribera los medios para su sustento, además de servirles como vía natural de comercio y transporte. De igual forma, contiene minerales y recursos de gran utilidad para el ser humano. Worster invita a entender el río como “un río circular” que conecta a las nubes, la lluvia y las corrientes subterráneas como parte del mismo sistema. Los ríos poseen un ciclo hidrológico particular, así como una historia geológica y ecológica, entrando en interacción con las sociedades que los perciben, los significan, los usan y los transforman. Pueden ser estudiados como fuentes de vida, de riqueza, de entretenimiento, de peligro o inspiración; han sido rutas para la colonización, obras de canalización para el comercio y represas para el crecimiento de ciudades o control de inundaciones.[[1]](#footnote-1)

El Meta forma parte de una amplia red hídrica compuesta por ríos, lagunas, caños, humedales, esteros y morichales, donde el agua constituye el elemento principal. El río Meta cuenta con una extensión de 850 km y recorre las sabanas tropicales de los Llanos colombianos en sentido este-noroeste hasta desembocar en el río Orinoco. Forma parte de la macrocuenca del Orinoco, que comparten Colombia y Venezuela. En Colombia la Orinoquia representa el 33.4 % del territorio nacional, de los cuales las sabanas abarcan cerca del 22%.

A nivel administrativo, el río Meta recorre y delimita los departamentos del Meta, Casanare, Vichada y Arauca, que en conjunto concentran apenas el 3.3% de la población del país. Se trata de una de las regiones con menor densidad poblacional, pero a la vez con una de las mayores expresiones de diversidad cultural. El 50 % de su población es indígena y vive en resguardos; seguida por la población llanera – campesinos mestizos que poblaron la región antes de la primera mitad del siglo XX – y los colonos – campesinos migrantes que llegaron después de 1950 –.[[2]](#footnote-2)

El río Meta ha sido la ruta fluvial más importante de la Orinoquia colombiana tanto por su extensión y caudal, como por su conexión con el río Orinoco y su cercanía a las regiones andina, amazónica y caribeña.

En tiempos prehispánicos, fue escenario de movilidad e intercambio para diversos pueblos indígenas, quienes lo integraron a una amplia red que comunicaba la Orinoquia con otras regiones del territorio, e incluso con el Pacífico.

Durante la época colonial, el Meta fue vinculado a las rutas comerciales del Atlántico que lo conectaron con Europa. En 2008, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) publicó su Cartera de Proyectos, que representa los resultados de los trabajos realizados entre 2003 y 2008, dentro de los cuales se espera que el río forme parte del corredor multimodal que conectará al océano Atlántico con el océano Pacífico.

La región de la Orinoquia, también conocida como Llanos Orientales, abarca una amplia diversidad de paisajes que se extienden desde el piedemonte llanero – entre 500 y 700 msnm. – hasta las sabanas bien drenadas e inundables. Esta extensa área ha sido muy importante tanto para la provisión de materias primas para las regiones cercanas como, desde el siglo XVII, para los mercados internacionales.

En el periodo colonial, productos como la quina, la sarrapia, las plumas, el caucho, las frutas, la yuca, el café, la carne y los cueros tuvieron gran relevancia comercial. En tiempos más recientes, han cobrado protagonismo el ganado, el plátano, la yuca, la maquinaria, los materiales de construcción, diversos víveres y, de manera destacada, los hidrocarburos.

Hacia finales del siglo XX resurgió el interés por los Llanos en un contexto diferente. En la década de 1970 se habían hallado importantes yacimientos de petróleo y la investigación científica comenzaba a demostrar el potencial de los suelos de la altillanura para una producción agrícola a escala industrial. La relevancia de estos hallazgos representó una posibilidad real de transformar las extensas áreas de sabanas – tradicionalmente destinadas a la ganadería – en zonas de cultivo que producirían comida y energía para un mundo en constante crecimiento poblacional y con una demanda cada vez mayor de recursos. De esta manera, las sabanas de los Llanos son presentadas al mundo como una de las últimas fronteras agrícolas del planeta.

Para el siglo XXI, las sabanas de la Orinoquia adquieren una nueva significación que complementa la anterior. En el marco de las dinámicas y discusiones ambientales del nuevo milenio, el cambio climático se vuelve un tema central. En esta línea, durante el segundo gobierno de Álvaro Uribe Vélez se implementó el programa llamado “El Renacimiento de la Orinoquia”, el cual incorporó, dentro de sus propuestas, estrategias orientadas a la mitigación de los efectos del cambio climático. El programa fue concebido como “proyecto de recuperación de bosque tropical húmedo del mundo [a partir de una] reconversión agroambiental de las sabanas que contribuya al rescate de la atmósfera (…); es una oportunidad única de desarrollo rural sistémico sostenible, que Colombia le ofrece al mundo y a su propia población, con el objeto de contribuir de manera sustancial a la estabilización del clima global”

**EL DERECHO AMBIENTAL**

La evolución de las normas ambientales puede entenderse a través de cuatro etapas principales, las cuales son:

La primera, se centra en disposiciones orientadas al uso específico de un recurso, como el riego, el agua potable, la navegación, entre otros.

La segunda, más evolucionada, encuadra la legislación en función de cada categoría o especie de recurso natural, coordinando los distintos usos (aguas, minerales, forestales, entre otros).

La tercera, orienta la normativa hacia el conjunto de los recursos naturales.

Finalmente, la cuarta etapa toma en consideración el entorno como conjunto global y atiende a los ecosistemas. Esta última comprende las normas ambientales en sentido estricto.

Estas etapas de la evolución legislativa, aunque sucesivas, no se excluyen unas a otras.

El Derecho Ambiental surge como una respuesta lógica a la necesidad de regular la explotación de los recursos naturales dentro de un marco de racionalidad, aprovechamiento sostenible y protección del ambiente. Su evolución ha sido rápida y progresiva, logrando incorporarse de manera transversal en las distintas ramas del ordenamiento jurídico y consolidándose, a su vez, como una disciplina autónoma vinculada con múltiples ciencias.

**Contexto histórico del derecho al Medio Ambiente**

• Primavera Silenciosa (1962), de la bióloga norteamericana Rachel Carson, fue el Bestseller que fundó las bases del ecologismo moderno. En él, la autora advierte sobre la creciente utilización de insecticidas, plaguicidas y herbicidas, señalando cómo estas sustancias, vertidas por el ser humano en el medio ambiente, ponen en riesgo su supervivencia y la de todos los organismos que en él habitan.

• La Conferencia de Estocolmo de 1972 centró la atención internacional en los problemas medioambientales, especialmente los relacionados con la degradación ambiental y la contaminación transfronteriza. Este último concepto resultó especialmente relevante, al poner de manifiesto que la contaminación no reconoce límites políticos ni geográficos, afectando a países, regiones y poblaciones más allá de su lugar de origen. Estos problemas medio ambientales mundiales tan importantes incluyen, por ejemplo, todo tipo de contaminación, el cambio climático, la reducción de la capa de ozono, el uso y administración de los océanos y los recursos de agua dulce, la deforestación excesiva, la desertificación y la degradación de la tierra, los vertidos peligrosos y la disminución de la diversidad biológica.

• En la Cumbre para la Tierra de 1992 se reconoció internacionalmente que la protección del medio ambiente y la administración de los recursos naturales deben integrarse en las cuestiones socioeconómicas de pobreza y subdesarrollo. Esta idea ha sido recogida en la definición del término desarrollo sostenible (o sustentable) hecha por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (la Comisión Brundtland) en 1987 como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Este concepto fue concebido como un punto de convergencia entre las demandas de quienes promueven el crecimiento económico y las de aquellos que priorizan la conservación del medio ambiente.

La reunión de Río de Janeiro señaló que los diferentes factores sociales, económicos y medio ambientales son interdependientes y cambian simultáneamente. El objetivo principal de la Cumbre fue establecer un programa extenso y un plan nuevo de acción internacional en materia de medio ambiente y desarrollo, destinados a guiar la cooperación internacional y el desarrollo de programas en el próximo siglo.

• El Protocolo de Kyoto es un instrumento internacional, consensuado en 1997 y auspiciado por la ONU, para luchar contra el cambio climático. El objetivo es que los países industrializados reduzcan en forma gradual sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en promedio un 5,2% en relación al nivel de 1990. Hay compensaciones financieras para facilitar el cumplimiento de la meta.[[3]](#footnote-3)

**CONTEXTO INTERNACIONAL DEL DERECHO AMBIENTAL.**

**PROTOCOLOS Y CONVENIOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE RECONOCIDOS Y SUSCRITOS POR COLOMBIA QUE HACEN PARTE DEL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD.**

**1971. Convenio de Ramsar –Irán**. Este Convenio fue suscrito en la ciudad de Ramsar el 2 de febrero de 1971 y entró en vigencia en 1975. Su finalidad es la de proteger los humedales o zonas húmedas del planeta y las especies de aves acuáticas en peligro de extinción. Para el Convenio, “son humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros.” El 2011 se conmemoró el Día Mundial de los Humedales con el lema “Bosques para agua y humedales” en armonía con la Declaración de las Naciones Unidas como el “Año Internacional de los Bosques”.

**En 1973. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).** Esta Convención fue celebrada en Washington el 3 de marzo de 1973 con el propósito de evitar que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres constituya una amenaza para su supervivencia, para lo cual estableció varios grados de protección: comercio controlado para especies de un determinado país y para especies provenientes de países miembros o no del Convenio, y comercio prohibido sin importar el país de procedencia. La CITES está en vigor desde el 1 de julio de 1975.  
  
**En 1985. Convención de Viena para la protección de la capa de Ozono**. Este Convenio fue acordado en las Naciones Unidas, en marzo de 1985, luego de que concluyeran las negociaciones iniciadas cuatro años antes y tomando en cuenta el Principio 21 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (1972), con la finalidad de: *“adoptar medidas apropiadas…para proteger la salud humana y el medio ambiente contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades humanas que modifiquen o puedan modificar la Capa de Ozono”.* Entró en vigor el 22 de septiembre de 1988.

**En 1987. Protocolo de Montreal.** Este Protocolo está destinado a controlar el uso de sustancias que causan el agotamiento de la capa de ozono con el objetivo de lograr su eliminación. Quedó abierto a la firma de los Estados desde el 16 de septiembre de 1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. Ha sido modificado en varias ocasiones: Londres 1990, Copenhague 1992, Viena 1995, Montreal 1997 y Beijing 1999.

**1989. Convenio de Basilea**. Este Convenio, considerado como un tratado ambiental de carácter global, tiene por objeto regular el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos mediante el cumplimiento de los principios del Convenio y las obligaciones de las Partes suscriptoras para asegurar un tratamiento cuidadoso con el medio ambiente. Fue acordado en Basilea el 22 de marzo de 1989 y entró en vigor el 5 de mayo de 1992.

**En 1992. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC).** Esta Convención fue firmada en New York  
el 9 de mayo de 1992, con la finalidad de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera para evitar que se produzcan cambios peligrosos en el sistema climático, entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Además, autorizó la aprobación de “enmiendas” o “protocolos” de acuerdo con los resultados de nuevos descubrimientos científicos, como es el caso del Protocolo de Kioto de 1997.

**En 1992. Convenio Marco sobre la Diversidad Biológica.** Este Convenio fue suscrito el 5 de junio de 1992 conforme lo acordado por la Convención de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), llamada “Cumbre de la Tierra”, con el propósito de lograr la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios de la utilización de los recursos genéticos. Entró en vigor, el 29 de diciembre de 1993 y contiene los acuerdos complementarios denominados Protocolo de Cartagena (2000) sobre Seguridad de la Biotecnología y el Protocolo de Nagoya (2011) sobre el Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización en el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

**En 1992. Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo.** La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, reunida en Rio de Janeiro el 3 y 14 de junio de 1992, expidió esta Declaración compuesta por veinte y siete principios, de los cuales, el número 15, expresa lo siguiente: *“Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de  
precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.”*

**En 1994. Convenio de Naciones Unidas de lucha contra la desertificación.** Este Convenio se refiere a la desertificación como “la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas;…” y su objetivo de lucha contra ella, entiende como “las actividades que forman parte de un aprovechamiento integrado de la tierra de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas para el desarrollo Sostenible…”.Fue acordado en París el 17 de junio de 1994 y entró en vigor el 26 de diciembre de 1996.

**1997. Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.** El Protocolo de Kioto fue suscrito el 11 de diciembre de 1997 por los Estados Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para agregar a ella nuevas obligaciones, entre otras, la de limitar las emisiones conjuntas de seis gases de efecto invernadero en un 5,2% para el conjunto de países industrializados durante el periodo 2008-2012. Este Protocolo entró en vigor el 16 de febrero del 2005.

**En 1997. Foro Intergubernamental de Bosques.** Este Foro fue establecido por el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas en 1997 como resultado del trabajo realizado por el Panel Intergubernamental de Bosques (1995) encargado de continuar el diálogo sobre el tema forestal iniciado en la Cumbre de la Tierra (1992). El objetivo, en general, es procurar toda clase de acuerdos para la protección de los bosques.

**En 1998. Convenio de Aarhus.** Este Convenio firmado en el puerto danés de Aarbus, el 25 de junio de 1998 es un instrumento de protección de los derechos de los ciudadanos a vivir en un medio que garantice su salud y bienestar que se propone sensibilizar a las personas sobre los problemas ambientales, facilitar el acceso a la información ambiental y propiciar la participación pública en la toma de decisiones. Está en vigor desde el 30 de octubre del 2001.

**En 1998. Convenio de Róterdam.** El Convenio de Róterdam fue aprobado el 11 de septiembre de 1998 para proteger la salud humana y el medioambiente mediante la regulación y control de las importaciones y exportaciones de productos químicos y plaguicidas considerados como peligrosos. La Comunidad Europea expidió la Decisión aprobatoria (2006/730/CE, 25 de septiembre del 2006) refiriéndose al procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional y el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo (689/2008, 17 de junio del 2008) relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

**En el 2000. Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología.** Este Protocolo es un acuerdo complementario del Convenio de Biodiversidad (2002) aprobado el 29 de enero del 2000 y en vigor desde el 11 de septiembre del 2003, destinado a controlar y evitar los riesgos que pudieren ocurrir en el comercio transfronterizo y la dispersión accidental de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna**.**

**2001. El Convenio de Estocolmo.** Este Convenio sobre Contaminantes Orgánicos y Persistentes (COP), fue firmado el 22 de mayo del 2001 en Estocolmo, ”, teniendo en cuenta el principio Nº 15 de la Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y Desarrollo (1992), con la finalidad de controlar y eliminar un grupo de doce compuestos peligrosos conocidos como “la Docena sucia. Entró en vigor el 17 de mayo del 2004.

**2001. Tratado Internacional sobre los Recursos Fito genéticos para la Alimentación y la Agricultura.**  La Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), aprobó este Tratado en su 31° Período de Sesiones efectuado en noviembre de 2001; dejó abierto a la firma de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, desde el 3 de noviembre del 2001 hasta el 4 de noviembre del 2002; y, entró en vigor el 29 junio del 2004. Según los términos del Tratado, sus objetivos son: por una parte, la conservación y utilización sostenible de los recursos fito genéticos para la alimentación y la agricultura; y, por otra, la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización en armonía con el Convenio sobre Diversidad Biológica, para una agricultura sostenible y la seguridad alimentaria. Define a estos recursos Fito genéticos, como “cualquier material genético de origen vegetal de valor real o potencial para la alimentación y la agricultura”.

**2010. Protocolo de Nagoya.** El Protocolo de Nagoya sobre el “Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su utilización”, fue aprobado por la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica, el 29 de octubre de 2010 en Nagoya-Japón, con el objetivo principal de compartir, de manera justa y equitativa, los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos. Quedó abierto a la firma de las partes en la Sede de las Naciones Unidas desde el 2 de febrero del 2011 al 2 de febrero del 2012 y entrará en vigor noventa días después de que se haya depositado el quincuagésimo instrumento de ratificación, aprobación, aceptación o adhesión, según corresponda.

**2015. Acuerdo de París o COP 21.** Es un avance hacia la disminución de GEI, haciéndose necesario en los países industrializados aumentar las medidas relativas al cambio climático para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, los años transcurridos desde su entrada en vigor ya han dado lugar a soluciones con bajas emisiones de carbono y a nuevos mercados. Cada vez más países, regiones, ciudades y empresas están estableciendo objetivos de neutralidad de carbono. Las soluciones de cero emisiones se están volviendo competitivas en todos los sectores económicos y ya representan el 25 % de las emisiones.

Para 2030, las soluciones de cero emisiones de carbono podrían ser competitivas en sectores que representan más del 70 % de las emisiones mundiales.

**2015. Agenda 2030.** El letargo crecimiento económico del mundo, las brechas sociales y la depredación del medio ambiente presentan grandes retos, quizás metas inalcanzables en tan solo 15 años para la comunidad internacional.

Frente a estos desafíos “La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, suscrita y aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de la ONU, establece una nueva visión sobre la sostenibilidad en sus dimensiones económica, social y ambiental de los 193 países firmantes, la cual, será la hoja de ruta para el trabajo de la ONU en procura de las metas propuestas.

Este documento integra dichas dimensiones de manera transversal e introduce temas prioritarios para los Estados en vía de desarrollo o mal denominados “tercermundistas”, como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad, crecimiento económico incluyente, ciudades con desarrollo sostenible y cambio climático, definidos en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible “ODS”:

* Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.
* Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
* Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades.
* Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
* Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
* Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación.
* Reducir la desigualdad en los países y entre ellos.
* Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
* Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
* Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.
* Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
* Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas.
* Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.

**NORMAS CONSTITUCIONALES INFRINGIDAS CON LA APROBACIÓN DE LA LEY 1938 DE 2018**

**Artículo 8o.** Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

**Artículo 13**. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

**Artículo 29**. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

**Artículo 79**. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

**Artículo 150**. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

(…) 7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; **reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía**; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. (Resaltado fuera de texto).

**Del art. 150 numeral 7° en concordancia con los arts. 8° y 79 de la Carta Fundamental**

El legislador al aprobar los arts. 1° y 2° de la Ley 1938 de 2018 el cual modificó parcialmente el primer párrafo del inciso tercero del artículo 33 de la Ley 99 de 1993 y el inciso segundo del art. 38 de la Ley 99 de 1993**, cambió la naturaleza jurídica de CORMACARENA establecida en el Parágrafo 1° art. 33 de la Ley 99 de 1993** “**DE LAS REGIONES CON RÉGIMEN ESPECIAL.** La administración de los recursos naturales y el medio ambiente en la región Amazónica, en el Chocó, en la Sierra Nevada de Santa Marta, **en la serranía de la Macarena**, en la región de Urabá, en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y en la región de la Mojana y del San Jorge, estará a cargo de Corporaciones para el desarrollo sostenible de las respectivas regiones**, las cuales se organizarán como Corporaciones Autónomas Regionales, con las características especiales que la presente Ley para su caso establece”**. (Subrayado y negrillas mío), y como lo determina el proyecto de Ley 244 Senado y 260 Cámara de 2018, **consagrado el espíritu de la ley en la exposición de motivos (Gaceta del Congreso 371 del 6 de junio de 2018) y los informes de comisión (Gacetas 419, 461, 613 y 646 de 2018),** sustrayendo los municipios del Departamento del Meta que de conformidad con el art. 33 de la Ley 99 de 1993 pertenecían a CORPORINOQUIA por hacer parte de la gran cuenca hidrográfica de los ríos Meta – Orinoco, **y ordenando que la jurisdicción territorial de CORMACARENA se trasladara al Departamento del Meta**; **subsumiendo el art. 2° de la Ley 1938 de 2018 el Área de Manejo Especial de la Macarena “AMEM**”, establecida en el Decreto 1989 de 1989 y el art. 38 de la Ley 99 de 1993, que eran la razón de ser de CORMACARENA, pues lo que hizo la norma ambiental nacional fue elevar la AMEM a rango de CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE como una CORPORACIÓN AUTÓNOMA con RÉGIMEN ESPECIAL.

**A *contrario sensu* sería si la redacción del artículo Segundo de la Ley 1938 de 2018 expresara que los municipios del Departamento del Meta que pertenecen a CORPORINOQUIA determinados en el art. 33 de la Ley 99 de 1993, harán parte o integraran la Jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena CORMACARENA,** y **REEMPLAZANDO** el término **en la SERRANÍA DE LA MACARENA** por **DEPARTAMENTO DEL META** del Parágrafo 1° del art. 33 de la Ley 99 de 1993.

Ahí sí, la CAR de la MACARENA continuaría rigiéndose por el régimen excepcional establecido para ella en el art. 38 del estatuto ambiental del país y su Área de Manejo Especial se hubiera ampliado a los demás municipios del Departamento del Meta.

Se concluye entonces, que los municipios del Meta que pertenecían a CORPORINOQUIA no se trasladaron al ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA, **si no, que, por el contrario**, el territorio del AMEM hará parte de una nueva jurisdicción con los otros municipios del Meta señalados en el art. 33 de la Ley 99 de 1993. Generando el legislador una CAR HIBRIDA y jugando al Frankenstein Ambiental, obteniéndose, como se demuestra en las actuaciones de CORMACACRENA, los resultados funestos que ello implica.

Debo destacar que la afirmación realizada, tiene un mayor asidero en la modificación que en el segundo debate del Senado hiciera la ponente, introduciendo el art. 1° nuevo y modificando el título del proyecto (Gacetas del Congreso 822 Acta 073, 443 y 491), donde es más evidente el cambio de la naturaleza jurídica de CORMACACRENA.

Teniendo en cuenta lo anterior, **el legislador**, al haber omitido REGLAMENTAR A CORMACARENA dentro de su nueva NATURALEZA JURÍDICA, establecida en el TITULO VI arts. 23, 24, 25, 26 y ss de la Ley 99 de 1993, y al olvidarse derogar o modificar su régimen especial ordenado en el Parágrafo 1° del art. 33 y en el art. 38 de la misma Ley y, no definir la nueva composición del CONSEJO DIRECTIVO, FUNCIONES Y COMPETENCIAS, **incurrió en una OMISIÓN LEGISLATIVA RELATIVA, generando una instrumentación de las dos disposiciones (art. 26 y art. 38 de la Ley 99 de 1993) e inseguridad jurídica en las actuaciones y actos expedidos por los miembros del consejo directivo y su director, en donde actúan y manipulan el estatuto ambiental a su conveniencia política, directiva o administrativa, produciendo un conflicto normativo** que causa un enorme perjuicio a los habitantes del departamento del Meta y al Área de Manejo Especial de la Macarena, la cual pertenece al ecosistema hídrico, biótico y abiótico a la Amazonía y no a la Orinoquia, hoy desatendida y en donde se presenta la más grande deforestación de la historia en la región de la Macarena y los parques naturales pertenecientes a la AMEM.

Es así, como la Ley 1938 de 2018 en ninguna de sus partes de la exposición de motivos, informes de ponencia o su contenido, expone las razones técnicas o científicas del porque desagrega de CORPORINOQUIA los municipios de VILLAVICENCIO, BARRANCA DE UPIA, CUMARAL, RESTREPO, CABUYARO, PUERTO LÓPEZ, PUERTO GAITAN, ACACIAS, GUAMAL, CASTILLA LA NUEVA, SAN MARTIN, CALVARIO, SAN CARLOS DE GUAROA y SAN JUANITO y, como consecuencia sus afluentes, ecosistemas y recursos naturales, de la CUENCA DEL RIO META-ORINOCO y los **UNIFICA** con el AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA, sin que exista conexidad entre estos, y aún más siendo los ecosistemas biótico y abiótico totalmente distintos, en razón a que la Serranía de la Macarena pertenece al ECOSISTEMA de la AMAZONÍA colombiana y no a la ORINOQUIA, como pretendieron hacer creer los autores de Ley 1938 de 2018.

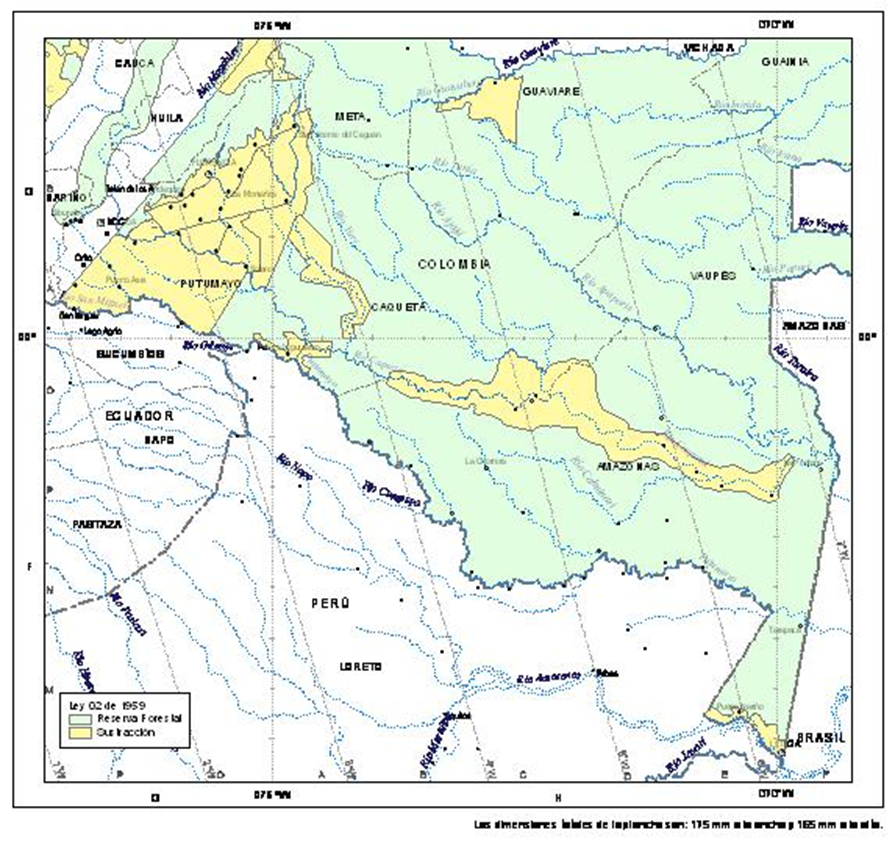
No podemos desconocer y sería incompresible que en esta exposición de motivos se abandonara el origen de CORMACARENA, su formación y creación legal como patrimonio biótico, abiótico, hídrico y en la conservación de sus especies de flora y fauna localizadas en la SERRANIA DE LA MACARENA, no solo de Colombia si no de la Humanidad; **lo que haría más expedita la aprobación del presente proyecto de ley aquí tratado, en la omisión del legislador y el afán de INTEGRAR los territorios del ÁREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA con la jurisdicción de LA CUENCA HIDROGRÁFICA DE LOS RIOS META y ORINOCO en el Departamento del Meta;** consultando intereses contrarios a la conservación del medio ambiente, la protección de las especies únicas de flora, fauna y la riqueza hídrica, entre otras, que hacen al AMEM única ante el mundo, y subsumirla o entregarla irresponsablemente al territorio del Departamento del Meta que pertenecía a CORPORINOQUIA, repudiando el congreso sus propios actos generados durante más de 7 décadas.

**El AMEM tiene su génesis jurídica en la Ley 52 del 24 de noviembre de 1948**, donde la Serranía de la Macarena es declarada como Reserva Natural Nacional y luego catalogada como Reserva Biológica de la Humanidad; de igual manera, mediante el Decreto 438 del 22 de febrero de 1949, reglamentario de la Ley 52 de 1948, se dispuso que La Macarena tenía por objeto conservar las riquezas naturales y se adscribió a la organización técnica y administrativa de estudios e investigaciones al Instituto Roberto Franco de Villavicencio, **siendo declarada como MONUMENTO NACIONAL mediante Ley 163 de 1959 en su “ARTÍCULO 5º.- Declárese como Monumento Nacional por su importancia científica, la Sierra de la Macarena, ubicada en la región oriental de Colombia”.**

Así mismo, La SERRANÍA DE LA MACARENA fue definida geográficamente por su pertenencia con los sistemas hidrográficos y de recursos naturales como parte integral de la Amazonía, establecida en la Ley 002 de 1959, la que, en el art. 1° literal g), define los siguientes límites para la “Zona de Reserva Forestal de la Amazonia”:

“Partiendo de Santa Rosa de Sucumbíos, en la frontera con el Ecuador, rumbo Noreste, hasta el cerro más alto de los Picos de la Fragua; de allí siguiendo una línea, 20 kilómetros al oeste de la cordillera Oriental hasta el alto de Las Oseras; de allí en línea recta, por su distancia más corta, al río Ariari, y por este hasta su confluencia con el río Guayabero o el Guaviare, por el cual se sigue aguas abajo hasta su desembocadura en el Orinoco; luego se sigue la frontera con Venezuela y el Brasil, hasta encontrar el río Amazonas, siguiendo la frontera sur del país, hasta el punto de partida.”

A partir de la entrada en vigencia de dicha ley, se han desarrollado diferentes procesos de sustracción de áreas que superan los 6'500.000 hectáreas, localizadas dentro de las zonas de reserva establecida, con diversos propósitos. (Fuente CORPOAMAZONÍA



Dentro de este amplio análisis sobre el desarrollo normativo de la nación en el establecimiento de un orden Constitucional y Legal en materia ambiental, no podemos excluir el Bloque de Constitucionalidad, que inicia con la suscripción de Colombia de la DECLARACIÓN DE ESTOCOLMO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE HUMANO, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en el año de 1972, donde se aprobó un conjunto de principios encaminados a orientar la relación entre desarrollo y medio ambiente, afirmando que debía implementarse en las naciones firmantes y en el orbe, un uso racional de los recursos naturales. Posteriormente, en el año de 1992, nuestra nación firmo la DECLARACIÓN DE RIO DE JANEIRO o lo que se denominó la Cumbre sobre la Tierra, en donde se reafirmaron los principios de la Declaración de Estocolmo y se determinó que: “La protección y mejoramiento del medio ambiente humano es una cuestión fundamental que afecta al bienestar de los pueblos y al desarrollo económico del mundo entero, un deseo urgente de los pueblos de todo el mundo y un deber de todos los gobiernos”. Como consecuencia de ello y de los estudios existentes sobre las cuencas hidrográficas en nuestro país, el **Gobierno Nacional presenta al Senado de la República el Proyecto de Ley 129 de 1992 “POR EL CUAL SE CREA EL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y SE ESTRUCTURA EL SISTEMA PÙBLICO NACIONAL DEL AMBIENTE”, cursando a la Cámara con el número 067 de 1993, que fue aprobado por el Congreso mediante la Ley 99 de 1993**, en donde, dando cumplimiento a los acuerdos, tratados y declaraciones internacionales en materia de protección del medio ambiente y derechos ambientales, organizó el Sistema Nacional Ambiental (SINA), reglamento el derecho fundamental al Medio Ambiente, creo el Ministerio del Ambiente, instituyó las CAR existentes y donde nacieron unas nuevas, entre ellas CORMACARENA Y CORPORINOQUIA.

Las CORPORACIONES AUTONOMAS, entre ellas CORPORINOQUIA y CORMACARENA a pesar de sus enormes falencias, se han constituido en los representantes ambientales en cada una de las regiones y se han mostrado internacionalmente como un interesante esquema de planificación regional ambiental, que tiene sus raíces **en las ideas sobre planificación integral de cuencas hidrográficas difundidas por la escuela norteamericana de planificación regional y fundamentadas en las aproximaciones pragmáticas e ingenieriles de esta escuela.** Creadas como resultado de los estudios que realizara la Escuela Norteamericana de Planificación Regional para la CEPAL y adoptados por el Gobierno Nacional en la creación de las CAR, en donde las microcuencas y cuencas hidrográficas del Rio Meta-Orinoco no tiene ninguna relación con los ecosistemas del Área de Manejo Especial de la Macarena, sus parques naturales y reservas forestales.

1. **IMPACTO FISCAL**

La presente iniciativa autoriza al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las CARs y los entes territoriales la asignación de los recursos de cada uno de sus presupuestos para atender las necesidades y obligaciones que se desprendan de la presente iniciativa; sin embargo, es relevante mencionar, que la Corte Constitucional en Sentencia C-911 de 2007, señala que el impacto fiscal de las normas, no puede convertirse en óbice, para que las corporaciones públicas ejerzan su función legislativa y normativa.

“En la realidad, aceptar que las condiciones establecidas en el artículo 7° de la Ley 819 de 2003 constituyen un requisito de trámite que le incumbe cumplir única y exclusivamente al Congreso reduce desproporcionadamente la capacidad de iniciativa legislativa que reside en el Congreso de la República, con lo cual se vulnera el principio de separación de las Ramas del Poder Público, en la medida en que se lesiona seriamente la autonomía del Legislativo.

Precisamente, los obstáculos casi insuperables que se generarían para la actividad legislativa del Congreso de la República conducirían a concederle una forma de poder de veto al Ministro de Hacienda sobre las iniciativas de ley en el Parlamento.

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda”.

En consecuencia, y teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional es el director de la economía nacional, corresponde al Ministerio de Hacienda y Crédito público proporcionar el estudio de impacto fiscal de la presente iniciativa de conformidad a lo estipulado en la sentencia de constitucionalidad 315 del 2008.

*Las obligaciones previstas en el artículo 7º de la Ley 819/03 constituyen un parámetro de racionalidad legislativa, que está encaminado a cumplir propósitos constitucionalmente valiosos, entre ellos el orden de las finanzas públicas, la estabilidad macroeconómica y la aplicación efectiva de las leyes. Esto último en tanto un estudio previo de la compatibilidad entre el contenido del proyecto de ley y las proyecciones de la política económica, disminuye el margen de incertidumbre respecto de la ejecución material de las previsiones legislativas.* ***El mandato de adecuación entre la justificación de los proyectos de ley y la planeación de la política económica, empero, no puede comprenderse como un requisito de trámite para la aprobación de las iniciativas legislativas, cuyo cumplimiento recaiga exclusivamente en el Congreso. Ello en tanto (i) el Congreso carece de las instancias de evaluación técnica para determinar el impacto fiscal de cada proyecto, la determinación de las fuentes adicionales de financiación y la compatibilidad con el marco fiscal de mediano plazo****;* ***y (ii) aceptar una interpretación de esta naturaleza constituiría una carga irrazonable para el Legislador y otorgaría un poder correlativo de veto al Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, respecto de la competencia del Congreso para hacer las leyes****. Un poder de este carácter, que involucra una barrera en la función constitucional de producción normativa, se muestra incompatible con el balance entre los poderes públicos y el principio democrático. Si se considera dicho mandato como un mecanismo de racionalidad legislativa, su cumplimiento corresponde inicialmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez el Congreso ha valorado, mediante las herramientas que tiene a su alcance, la compatibilidad entre los gastos que genera la iniciativa legislativa y las proyecciones de la política económica trazada por el Gobierno. Así, si el Ejecutivo considera que las cámaras han efectuado un análisis de impacto fiscal erróneo,* ***corresponde al citado Ministerio el deber de concurrir al procedimiento legislativo, en aras de ilustrar al Congreso sobre las consecuencias económicas del proyecto****. El artículo 7º de la Ley 819/03 no puede interpretarse de modo tal que la falta de concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público dentro del proceso legislativo, afecte la validez constitucional del trámite respectivo.* (Negrilla fuera de texto)

Es decir, el mencionado artículo debe interpretarse en el sentido de que su fin es obtener que las leyes que se dicten tengan en cuenta las realidades macroeconómicas, pero sin crear barreras insalvables en el ejercicio de la función legislativa ni crear un poder de veto legislativo en cabeza del Ministro de Hacienda. Así las cosas, se hace el llamado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que elabore el análisis económico y el eventual impacto fiscal que pudiese generar el presente proyecto de ley.

1. **CONFLICTO DE INTERESES**

Con base en el artículo 3º de la Ley 2003 de 2019, según el cual el autor del proyecto y los ponentes presentan en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describe las circunstancias o eventos que podrían generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar.

A continuación, se pondrán de presente los criterios que la Ley 2003 de 2019 contempla para hacer el análisis frente a los posibles impedimentos que se puedan presentar en razón a un conflicto de interés en el ejercicio de la función congresional, entre ellas la legislativa.

“Artículo 1º. El artículo 286 de la Ley 5 de 1992 quedará así: (…)

*a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.*

*a) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.*

*b) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.*

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

*a. Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.*

*b. Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.*

*c. Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual, el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.*

*d. Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.*

*e. Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.*

*f. Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos (...)”.*

De lo anterior y de manera meramente orientativa, se considera que para la discusión y aprobación de este Proyecto de Ley no existen circunstancias que pudieran dar lugar a un eventual conflicto de interés por parte de los Honorables Congresistas, pues es una iniciativa de carácter general, impersonal y abstracta, con lo cual no se materializa situación concreta que permita enmarcar un beneficio particular, directo ni actual. En suma, se considera que este proyecto se enmarca en lo dispuesto por el literal a del artículo primero de la Ley 2003 de 2019 sobre las hipótesis de cuando se entiende que no hay conflicto de interés.

En todo caso, es pertinente aclarar que los conflictos de interés son personales y corresponde a cada Congresista evaluarlos, pudiendo manifestar cuando considere que está inmerso en impedimento.

Con los anteriores argumentos Constitucionales, legales, culturales y sociales pongo a consideración de los Honorables Congresistas la presente iniciativa que tiene por objeto declarar el Río Meta, su cuenca y afluentes, su biótica y abiótica dentro de la Orinoquia Colombiana, como sujetos de derechos.

De ustedes con toda consideración y respeto

**JAIME RODRIGUEZ CONTRERAS**

Representante a la Cámara

Departamento de Meta

1. file:///C:/Users/claudia.salamanca/Downloads/Dialnet-ElRioMetaEnElProcesoDeFronterizacionDeLaFronteraCo-8291681.pdf [↑](#footnote-ref-1)
2. ibidem [↑](#footnote-ref-2)
3. https://la-razon.com/la\_gaceta\_juridica/Historia-Derecho-Ambiental\_ [↑](#footnote-ref-3)